



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Civil Municipal
Madrid Cundinamarca
Calle 7ª N° 340 Piso 2
Tel: 0918254123

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA
EJECUTANTE	CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA
EJECUTADO	GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE
RADICACION	2020 – 0641

Madrid, Cundinamarca, junio once (11) de dos mil veintiuno (2021). –

Verificadas las condiciones del párrafo segundo del artículo 390 del Código General del Proceso, se definirá la instancia en el asunto de la referencia de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial la parte ejecutante CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA promueve proceso EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA, contra el extremo ejecutado GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, para forzarlo al pago de las cuotas de administración insolutas contenidas en la certificación del pasado catorce (14) de agosto, emitida por el representante legal del citado conjunto para que le solucionen las cuotas de administración insolutas generadas entre abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020), las cuotas que se sigan causando junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, accionando además sobre las cuotas que en lo sucesivo se causen, los intereses que se generen hasta el pago de las obligaciones las costas y agencias en derecho producto del trámite del presente proceso.

El pasado doce (12) de noviembre, se profirió el mandamiento ejecutivo solicitado, cuyo contenido evidenció directamente la parte ejecutada: GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, de acuerdo a la efectividad de las citaciones y avisos dispuestos en su favor, notificándose personalmente el pasado 19 de abril, concentrándose debidamente la relación procesal en las condiciones documentadas, sin que propusiera excepciones guardó silencio respecto de la acción desplegada.

CONSIDERACIONES

Se define la instancia al concurrir a cabalidad los presupuestos procesales porque la relación jurídico procesal aparece legalmente constituida, no existe causa de nulidad que invalide lo actuado, ni se advierte irregularidad que afecte el trámite del proceso o que impida proveer una decisión de fondo respecto de la controversia sometida a consideración de este Despacho. En las condiciones del artículo 443, numeral 2°, inciso segundo del Código General del Proceso, se definirá la instancia porque el trámite dispuesto para el fenecimiento de los procesos ejecutivos, se verificó en la forma que documenta el expediente sin reparos por los intervinientes.

Bajo los antecedentes procesales expuestos, define el Despacho la prosperidad de la acción ejecutiva desplegada, considerando que por esencia el trámite de estos procesos solo corresponde a las obligaciones claras, expresas

y actualmente exigibles que constan en documentos que provienen del deudor o de su causante y constituyen plena prueba en su contra y a salvo las consideraciones sobre las obligaciones modales, plazos y condiciones, dichas circunstancias se ratifican y se tornan inexpugnables cuando la acción procura el cobro de actas emitidas por los administradores de las propiedades horizontales, en cuanto legalmente¹ se le atribuyó mérito ejecutivo a esos documentos con los siguientes términos:

“...ARTÍCULO 79. EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. Los Administradores de Unidades Inmobiliarias Cerradas podrán demandar la ejecución de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias impuestas a propietarios y moradores. En tales procesos de liquidación de las obligaciones vencidas a cargo del propietario o morador, realizadas por el Administrador, prestará mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la presente ley, sin necesidad de protesto ni otro requisito adicional. **PARÁGRAFO.** En todo caso el copropietario de cada inmueble responderá solidariamente por todas las obligaciones ordinarias y extraordinarias y por las sanciones pecuniarias impuestas a los moradores de su inmueble...”

Por tal razón como la Ley le reconoce esos efectos, corresponde el mérito ejecutivo reclamado a la certificación del pasado catorce (14) de agosto emitida contra la parte ejecutada: GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, como titular del derecho de dominio sobre el inmueble respecto del que se exigen las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre el abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020), las cuotas que se sigan causando junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, certificación que además de satisfacer las formalidades que le son propias, contiene una obligación clara, expresa, actualmente exigible con cargo de la parte ejecutada, en cuanto constituyen plena prueba en su contra, y a salvo las consideraciones sobre las obligaciones modales, plazos y condiciones, dichas circunstancias se ratifican y se toman casi inexpugnables cuando la acción procura el cobro de obligaciones que legitiman a quien promueve, el cobro del derecho literal y autónomo que en él se incorpora, atribuyéndoles independencia para que su ejercicio se despliegue sin considerar el acto o el negocio jurídico que lo determinó.

El documento base del recaudo que la parte ejecutante presentó para el cobro, corresponde a la certificación del pasado catorce (14) de agosto emitida por el representante legal del citado conjunto para que le solucionen las cuotas de administración insolutas generadas entre el abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020) junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, certificación suscrita por la representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA, documento que según los artículos 48 y 70 de la Ley 675 de 2001, en los aspectos allí consignados presta mérito ejecutivo, por ajustarse a los términos señalados por artículo 442 del reseñado estatuto procesal, que faculta la acción forzada sobre obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que constituyan plena prueba contra él, “...o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía

¹ Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. ARTÍCULO 48. Procedimiento ejecutivo. En los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere esta ley para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, sólo podrán exigirse por el Juez competente como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el título ejecutivo contenitivo de la obligación que será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de intereses expedido por la Superintendencia Bancaria o por el organismo que haga sus veces o de la parte pertinente del reglamento que autorice un interés inferior. La acción ejecutiva a que se refiere este artículo, no estará supeditada al agotamiento previo de los mecanismos para la solución de conflictos previstos en la presente ley.

aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, **y los demás documentos que señale la ley...**” (Negrilla ajena al texto).

En el caso en estudio después de surtida la notificación de la parte demandada, se encuentra que GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE incumplió el mandamiento ejecutivo del pasado doce (12) de noviembre, en lo relativo al pago de la obligación y sin que presentaran medio exceptivo alguno, se abstuvo de replicarlo por lo que se impone resolver la instancia sin más condicionamientos ante el silencio desplegado, que genera, como en la mayoría de los procedimientos, una sanción que para el caso de los procesos ejecutivos, corresponde a un allanamiento que adquiere mayor connotación y gravedad al considerar que el artículo 440 inciso 2° del Código General del Proceso, prácticamente lo instituyó como una aceptación de las pretensiones, al establecer:

“...Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado...” Negrilla y subraya ajena al texto. -

Para el cobro forzado la parte demandante presentó como título la certificación del pasado catorce (14) de agosto que expresa, detallada y concretamente registra las sumas insolutas generadas entre el abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020) junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, emitida por el representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA, en procura de la solución de las cuotas de administración insolutas generadas durante periodo referido periodo, a cargo de la parte ejecutada GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, frente a quienes la certificación aportada concita los requisitos generales y particulares exigidos por el derecho cartular, razón por la cual constituye un título cuyos privilegios son por todos conocidos y que se concretan en las condiciones del artículo 422 del Código General del Proceso, pues además de satisfacer las formalidades que le son propias, contiene una obligación clara, expresa, actualmente exigible con cargo al ejecutado, que consta en documentos que provienen del deudor o de su causante y constituyen plena prueba en su contra, y a salvo las consideraciones correspondientes a las obligaciones modales, plazos y condiciones, dichas circunstancias se ratifican y se tornan casi inexpugnables ante los títulos ejecutivos en los que, conforme el artículo 424 del código citado legitiman a quien promueve, el cobro del derecho literal y autónomo que en él se incorpora, atribuyéndoles independencia para que su ejercicio se despliegue sin considerar el acto o el negocio jurídico que determinó su expedición.

Bajo tales circunstancias, por omitir refutar los términos con los que se ejerce la acción cambiaria reclamada, asumirá la parte demandada GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE la obligación de solucionar el capital pretendido en el presente proceso junto a las costas y demás sumas dispuestas en la orden de pago del pasado doce (12) de noviembre, porque GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, se constituyó en deudor de la parte ejecutante, dada la condición reportada en la certificación allegada. Como la demanda se funda en la mora de solucionar por la obligada la contraprestación asumida, dispuesto el traslado correspondiente, notificada de la orden emitida, sin que se

opusieran a las pretensiones, resulta en el proceso que los documentos aportados dan cuenta que la parte demandante, demostró plenamente la existencia de una obligación insoluta, que la parte ejecutada omitió solucionar materializándose la acción únicamente sobre las sumas específicas determinadas en la certificación del pasado catorce (14) de agosto, que solo abarcará el periodo comprendido entre abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020), junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, en cuanto fueron los únicos montos determinados en forma específica con cargo de la parte ejecutada debidamente acreditados en el proceso, como quiera que ninguna otra obligación certificó la parte demandante, tampoco su apoderado la aportó en el momento procesal oportuno y finalmente, al resolverse la instancia, ya no tienen cabida en cuanto la parte ejecutada ya no tendrá ninguna posibilidad de controvertirlos, rebatirlos o si quiera proponer medios exceptivos contra los mismos, ya que el termino de excepciones igualmente concluyó en un proceso en el que solo resta materializar la liquidación de las obligaciones acreditadas y debatidas en el proceso sobre las que específicamente, preservando los derechos de la parte ejecutada, se verificó su requerimiento, constitución en mora y frente a ella se le permitió desplegar los derechos de defensa y contradicción que como preceptos fundamentales debieron y tienen que garantizarse durante la presente ejecución a quien no se le puede privar del derecho de controvertir y o desvirtuar la exigencia de otros montos que indudablemente se causan por su condición de copropietario los cuales resultan ajenos a la ejecución en cuanto omitieron certificarlos, acreditarlos y aportar los documentos al proceso cuyo instancia finaliza con la presente determinación.

El incumplimiento de la anterior carga, determina ni más ni menos que, conforme reiterada posición jurisprudencial, se apliquen tales efectos en cuanto entendido el proceso, como el mecanismo que materializa el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de índole procesal o sustancial que la ley distribuye entre las partes, el juez o incluso terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos.

Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que el cumplimiento del mandato previsto en el numeral séptimo del artículo 95 de la Carta Política, según el cual son deberes de la persona y del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibidem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código.

Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, número 130).

Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio

sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa².

Respecto de lo anterior se debe señalar que una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, de modo que no se puede constreñir a cumplirla, así entonces la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material, en otras palabras, cuando las pruebas y particularmente frente a los ejecutivos el título y la obligación no se acreditan con la presentación de la demanda o con las excepciones, si bien al litigante le corresponde la facultad de contestar, de probar, de alegar; cuando se abstiene de ejecutar tempestivamente esas conductas procesales, asume el riesgo de obtener la resolución del proceso sin sus argumentos, sin su defensa y sin su intervención activa que seguramente determinara el fracaso de sus aspiraciones, porque surtido el trámite del proceso su resolución imperativamente se produce en aplicación del postulado relacionado con el deber y obligación del Juez de resolver el mismo con los medios legal y oportunamente allegados al proceso, tal como lo preceptúan los artículos 164 y 173 del Código General del Proceso, justificándose en tales postulados el fracaso de las pretensiones relacionadas con las cuotas futuras e intereses en cuanto nunca fueron determinadas y a la fecha se ignoran los montos exigidos a la parte ejecutada.

DE LA CONDENA EN COSTAS

Se proveerán de acuerdo a las circunstancias del artículo 361 del Código General del Proceso y el acuerdo N° 2222 del 10 de diciembre de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, con cargo de la parte demandada y ejecutada GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, cuyo reconocimiento procede atendiendo que el artículo 365 del Código General del Proceso, no solo autoriza su reconocimiento sino la condena al pago de las que se encuentren causadas en el proceso que se liquidaran en la medida de su comprobación, atendiendo la duración del proceso, complejidad e intervención de las partes, cuyos aspectos en el presente asunto no ofrece controversia en cuanto la duración del proceso, la ausencia de controversia y la escasa actividad procesal dispuesta determinan como razonable y fundado imponerle a la parte ejecutada por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a ciento treinta y cinco mil pesos moneda corriente (\$135.000,00 M/cte.), cuyo monto incluirá la secretaria en la correspondiente liquidación conforme con el artículo 366 del Código general del Proceso en la oportunidad procesal pertinente al efectuar la liquidación de las costas y agencias en derecho que se proveerán con cargo de GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, generadas por el trámite de la presente ejecución.

Por lo expuesto, el JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA, por autoridad de la Ley.

² Referencia: Expediente D-10902. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". Accionantes: Alejandro José Peñarredonda Franco y Helena Carolina Peñarredonda Franco. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. 24 de febrero de 2016. La Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-086/16-

RESUELVE

PROSIGA la ejecución, tal como se dispuso en el auto de mandamiento ejecutivo del pasado doce (12) de noviembre y en esta decisión, emitida contra la parte ejecutada GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA promovido respecto de la certificación del pasado catorce (14) de agosto sobre las cuotas de administración generadas entre el abril de dos mil dieciocho (2018) y marzo de dos mil veinte (2020), junto a los intereses moratorios causados, soportados en la certificación que sustenta el mandamiento de pago emitido sobre el apartamento N° 401 del interior N° 7 del citado conjunto residencial ubicado en la calle 4 N° 1A-126 Este Supermanzana 9 de esta comprensión municipal, conforme el trámite ejecutivo que le promovió mediante apoderado judicial, el CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. -

VALORAR los bienes embargados y secuestrados en este proceso, o los que se embarguen con posterioridad. -

REQUERIR a las partes para que atiendan en forma expedita las obligaciones relacionadas por el artículo 446 de Código General del Proceso.

CONDENAR en costas a la parte ejecutada y demandada GUSTAVO ANTONIO ESTRADA ARROYAVE, inclúyanse como agencias en derecho de su cargo la suma de ciento treinta y cinco mil pesos moneda corriente (\$135.000,00 M/cte.), que formaran parte de la liquidación de costas que practicará la secretaria conforme el artículo 366 del Código General del Proceso. Tásense.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez

JOSÉ EUSEBIO VARGAS BECERRA

Firmado Por:

JOSE EUSEBIO VARGAS BECERRA

JUEZ MUNICIPAL

JUGADO 0001 CIVIL MUNICIPAL DE MADRID

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme al documento Ley 527/09 y el دستور التنظيمي 2364/12

Código de verificación: 311464829416cbab2ed481a0e47201949e2a2547175679ea1584a

Documento generado en 12/06/2021 11:31:18 AM

Valde este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.majudicial.gov.co/firmaElectronica>